Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **02195/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por el **C. XXXXXXXXXXXXX**,en lo sucesivo la parte **Recurrente**, en contra de la respuesta de la **Fiscalía General de Justicia del Estado de México**,en lo subsecuente **El Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO. De la solicitud de información.**

En fecha dos de abril de dos mil veinticuatro, la parte **Recurrente**, presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia **(PNT)**, vinculada al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número de expediente **00343/FGJ/IP/2024**, mediante la cual solicitó lo siguiente:

*“/////A/////D/////J/////U/////N/////T/////O” (Sic).*

El particular al momento de ingresar su solicitud de información, adjuntó el archivo electrónico denominado *“Archivo Adjunto a la Solicitud”*; cuyo contenido versa en lo siguiente:

*“Solicito conocer el número de cuerpos, cadáveres y/ u osamentas que al día del 2 de abril de 2024 se encuentren en calidad de no identificados o desconocidos y que hayan sido ingresados a la institución forense y/o servicios médicos forenses de toda la entidad federativa del 1 de enero de 2010 al 1 de enero de 2018.*

*Solicito que para cada cuerpo, cadáver y/u osamenta se entregue la siguiente información que es pública y existente de acuerdo evidencia presentada más adelante:*

*1. Año en que fue ingresado cada cuerpo, cadáver y/u osamenta a los servicios médicos forenses de la entidad federativa.*

*2. Sexo de cada cuerpo, cadáver y/u osamenta a los servicios médicos forenses de la entidad federativa.*

*3. Lugar actual de resguardo de cada cuerpo, cadáver y/u osamenta a los servicios médicos forenses de la entidad federativa. Es decir, si fueron enviados a centros educativos y/o universidades, si están resguardado en algún servicio médico forense, si fueron inhumados en alguna fosa común, si fueron resguardados en algún centro de resguardo, panteón ministerial o panteón forense o algún otro lugar de resguardo.*

*Sin embargo, en la respuesta a la solicitud con folio 01142/FGJ/IP/2019, el mismo Sujeto Obligado respondió con el número de oficio 082/MAIP/FGJ/2020 lo siguiente:*

*Al respecto, esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con fundamento en los artículos 1, 4 y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, hace de su conocimiento que de acuerdo a lo informado por el por el Coordinador General de Servicios Periciales, Servidor Público Habilitado, después de efectuar una búsqueda en sus archivos, localizó que del año 2010 al corte de 31 de diciembre de 2019, se cuenta con 103 cuerpos sin identificar en gavetas, 5,383 en fosa común y 4 donados a la Universidad Autónoma del Estado de México, para fines académicos, cabe señalar que dichas cifras son variables derivado de la identificación de los mismos.*

*Esto se muestra en las siguientes capturas de pantalla del oficio citado.*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*Como puede verse, en dicha respuesta el Sujeto Obligado remitió información desde 2010.*

*Asimismo, en el proceso de recurso de revisión* ***00210/INFOEM/IP/RR/2024****, en la página 18, este Sujeto Obligado entregó información sobre el año de ingreso, el sexo y el lugar de resguardo, como puede apreciarse en la siguiente captura de pantalla:*



*Como puede apreciarse, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuenta con información desde 2010. Esto constituye un hecho notorio de acuerdo con el primer párrafo del artículo 92, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley en la materia.*

*Igualmente, resulta aplicable, por analogía al caso en concreto, la Jurisprudencia con registro número 168124, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, en enero de 2009, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala lo siguiente:*

*“****HECHO NOTORIO.*** *LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada ‘internet’, del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.”*

*En ese sentido, es claro que la información existe respecto a los años 2010 a 2018 y también cuenta con información desagregada por año de ingreso, sexo de los cuerpos, cadáveres y/u osamentas y lugar de resguardo.” (Sic).*

**MODALIDAD DE ENTREGA:** A través de **Correo Electrónico**.

**SEGUNDO. De la respuesta del Sujeto Obligado.**

De las constancias que obran en el sistema SAIMEX, se advierte que en fecha veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, **El Sujeto Obligado** emitió la respuesta en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*se proporciona respuesta Asimismo, se hace de conocimiento que de conformidad con el artículo 178 de la Ley de la materia, podrá inconformarse de la respuesta otorgada, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, a través del recurso de revisión, presentado ante el INFOEM o esta Unidad de Transparencia, dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de presente respuesta.*

*ATENTAMENTE*

*LICENCIADA EN DERECHO NORMA ANGÉLICA ZETINA MARTÍNEZ” (Sic).*

El **Sujeto Obligado** adjuntó a su respuesta, el archivo electrónico denominado *“OFICIO NÚMERO 01385-MAIP-FGJ-2024.pdf”;* cuyo contenido no se inserta por ser del conocimiento de las partes, sin embargo, será motivo de estudio en el Considerado respectivo.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta por parte del **Sujeto Obligado**, la parte **Recurrente** interpuso el presente recurso de revisión en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, el cual fue registradoen el sistema electrónico con el expediente número **02195/INFOEM/IP/RR/2024**, en el cual aduce, las siguientes manifestaciones:

1. **Acto Impugnado:** *“La respuesta incompleta proporcionada por el Sujeto Obligado en tanto no entregó información respecto al periodo 2010-2017 pese a que en una solicitud anterior sí los ha entregado, constituyendo una hecho notorio su existencia. Los detalles se encuentran en el documento adjunto.” (Sic).*
2. **Razones o Motivos de Inconformidad**: *“El Sujeto Obligado no entregó la información completa en tanto no entregó información respecto al periodo 2010-2017 pese a que en una solicitud anterior sí los ha entregado, constituyendo una hecho notorio su existencia. Los detalles se encuentran en el documento adjunto de trámite (edomex1) y la respuesta anterior a la solicitud con folio 01142/FGJ/IP/2019 en la que se constata que la información es existente y constituye un hecho notorio que debe ser pública y, en consecuencia, entregada.” (Sic).*

El ahora **Recurrente** al momento de interponer el presente recurso de revisión, adjuntó los archivos electrónicos denominados *“edomex1.pdf”* y *“EDOMEX NO ID 160.pdf”*, cuyo contenido versa en lo siguiente:

* **“edomex1.pdf”:**

*“El Sujeto Obligado respondió a la solicitud con folio 00343/FGJ/IP/2024 a través del oficio 01385/MAIP/FGJ/2024 con fecha del 23 de abril de 2024 lo siguiente:*

**

*Sin embargo, la solicitud realizada por este peticionario fue clara en cuanto a que se requería lo siguiente:*

**

*En ese sentido, es claro que la solicitud versa sobre información respecto a cuerpos, cadáveres y/u osamentes que al día del 2 de abril de 2024 se encontraban como no identificados o desconocidos y que fueron ingresados a la institución forense y/o servicios médicos forenses de toda la entidad federativa del* ***1 de enero de 2010 al 1 de enero de 2018.****Sin embargo, el Sujeto Obligado entregó la información solicitada únicamente a partir de 2018.*

*Esto implica que el Sujeto Obligado no fue congruente de acuerdo con el Criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) debido a que no respondió lo que le fue requerido. Esto indica referido Criterio:*

***Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.*

*Adicionalmente, el Sujeto Obligado no fue exhaustivo en términos del mismo Criterio en tanto la información respecto a los cuerpos, cadáveres y/u osamentes que al día del 2 de abril de 2024 se encontraban como no identificados o desconocidos y que fueron ingresados a la institución forense y/o servicios médicos forenses de toda la entidad federativa del* ***1 de enero de 2010 al 1 de enero de 2018sí es existente.***

*En la respuesta a la solicitud con folio 01142/FGJ/IP/2019, el mismo Sujeto Obligado respondió con el número de oficio 082/MAIP/FGJ/2020 lo siguiente:*

**

**

*Nótese que el tercer párrafo de la segunda página del oficio de respuesta indica lo siguiente:*

*Al respecto, esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con fundamento en los artículos 1, 4 y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, hace de su conocimiento que de acuerdo a lo informado por el por el Coordinador General de Servicios Periciales, Servidor Público Habilitado, después de efectuar una búsqueda en sus archivos****, localizó que del año 2010 al corte de 31 de diciembre de 2019****, se cuenta con 103 cuerpos sin identificar en gavetas, 5,383 en fosa común y 4 donados a la Universidad Autónoma del Estado de México, para fines académicos, cabe señalar que dichas cifras son variables derivado de la identificación de los mismos.*

*Como puede apreciarse, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuenta con información desde 2010, no desde 2018, como entregó en respuesta a la presente solicitud que deriva en esta queja. En ese sentido, es claro que el Sujeto Obligado no realizó una búsqueda exhaustiva en tanto es un hecho notorio de acuerdo con el primer párrafo del artículo 92, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley en la materia. Igualmente, resulta aplicable, por analogía al caso en concreto, la Jurisprudencia con registro número 168124, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, en enero de 2009, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala lo siguiente:*

*“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada ‘internet’, del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.”*

*En ese sentido, es claro que la información existe respecto a los años 2010 a 2018.*

*Por ello, se solicita a este Instituto que revoque la respuesta del Sujeto Obligado y* ***ordene la entrega completa de la información respecto, al menos, el periodo 2010 a 2023.***

*Asimismo, que se ordene la entrega la información en formato de datos abiertos, como fue solicitadoy lo indica el artículo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y si equivalente en la legislación estatal:*

*Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.*

***En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos****.” (Sic)*

* ***“EDOMEX NO ID 160.pdf”:***

*En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Hago referencia al contenido de su solicitud de información pública, presentada el 10 de diciembre del año 2019, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, misma que fue registrada en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), bajo el folio 01142/FGJ/IP/2019, en la que pide lo siguiente:*

*“Solicito conocer el número de cuerpos o cadáveres no identificadas que se han registrado del 1 de enero de 2006 al 1 de diciembre de 2019, y que al 1 de diciembre de 2019 continúan sin ser identificados.*

*En caso de existir la siguiente información, solicito que esta información sea desagregada por*

*1. Año en el que se registró cada uno de estos cuerpos o cadáveres no identificados,*

*2. Sexo de cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados.*

*3. Causa de muerte de cada una de las personas no identificadas.*

*4. Lugar en donde fue encontrado cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, incluyendo si fueron encontrados en una fosa clandestina o no.*

*5. El lugar en donde se encuentra actualmente cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, es decir, si se encuentran en alguna universidad, en fosa común, en los servicios médicos forenses, en algún almacenamiento temporal como cámaras frigoríficas externas a la unidad del servicio médico forense, almacenes, cámaras frigoríficas en camiones de carga o tráilers, por mencionar algunos ejemplos.*

*6. Si se le realizó necropsia a cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados.*

*7. Si se cuenta con perfil genético que permita la identificación de cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados.*

*8. Si se expidió el certificado de defunción a cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados.*

*9. Si se cuenta con un Archivo básico para los cadáveres no identificados o con hipótesis de identificación, de acuerdo al Protocolo para el tratamiento e identificación forense*

*Solicito que cada renglón de la tabla corresponda a un registro de un cuerpo o cadáver no identificado, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud.*

*En caso de que esta información se encuentre en formato .xlsx (Excel), solicito que se remita dicho formato.” (sic).*

***Al respecto, esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con fundamento en los artículos 1, 4 y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, hace de su conocimiento que de acuerdo a lo informado por el por el Coordinador General de Servicios Periciales, Servidor Público Habilitado, después de efectuar una búsqueda en sus archivos, localizó que del año 2010 al corte de 31 de diciembre de 2019, se cuenta con 103 cuerpos sin identificar en gavetas, 5,383 en fosa común y 4 donados a la Universidad Autónoma del Estado de México, para fines académicos, cabe señalar que dichas cifras son variables derivado de la identificación de los mismos.***

*En referencia a:*

*1. Año en el que se registró cada uno de estos cuerpos o cadáveres no identificados,*

*2. Sexo de cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados.*

*3. Causa de muerte de cada una de las personas no identificadas.*

*4. Lugar en donde fue encontrado cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, incluyendo si fueron encontrados en una fosa clandestina o no.*

*5. El lugar en donde se encuentra actualmente cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados, es decir, si se encuentran en alguna universidad, en fosa común, en los servicios médicos forenses, en algún almacenamiento temporal como camiones de carga, por mencionar algunos ejemplos.*

*Dicha información no es procesada por el Servicio Médico Forense, por lo que no es posible atender su petición en los términos que requiere y esta Institución no se encuentra obligada a procesar, resumir, efectuar cálculos o practicar investigaciones conforme al interés del solicitante, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Transparencia antes invocada, que establece lo siguiente:*

*“****Artículo 12.***

*(…)*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

*En referencia a los siguientes cuestionamientos se informa lo siguiente:*

*6. Si se le realizó necropsia a cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados.*

*Sí.*

*7. Si se cuenta con perfil genético que permita la identificación de cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados.*

*Sí.*

*8. Si se expidió el certificado de defunción a cada uno de los cuerpos o cadáveres no identificados.*

*Sí.*

*9. Si se cuenta con un Archivo básico para los cadáveres no identificados o con hipótesis de identificación, de acuerdo al Protocolo para el tratamiento e identificación forense*

*Sí.*

*Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.*

*A T E N T A M E N T E*

*YAMILIT LEYVA GUTIÉRREZ*

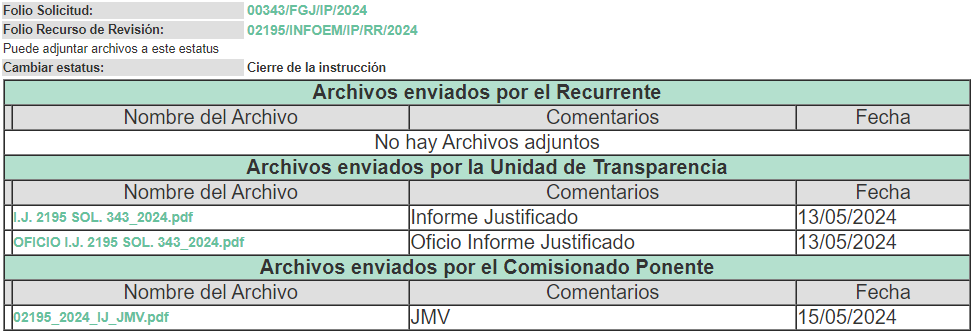
*TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA” (Sic).*

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

Medio de impugnación que le fue turnado al Comisionado Presidente **José Martínez Vilchis**, por medio del sistema electrónico, en términos del arábigo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, del cual recayó acuerdo de admisión en fecha treinta de abril de dos mil veinticuatro, determinándose en él, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de manifestaciones y/o alegatos.**

Una vez transcurrido el término legal referido se destaca que, en fecha trece de mayo de dos mil veinticuatro, el **Sujeto Obligado** remitió su informe justificado mediante los archivos electrónicos denominados *“I.J. 2195 SOL. 343\_2024.pdf”* y *“OFICIO I.J. 2195 SOL. 343\_2024.pdf”*; mismos que fueron puestos a la vista del particular mediante Acuerdo de fecha quince del mismo mes y año; asimismo, se aprecia que la parte **Recurrente** no emitió alegatos, pruebas o manifestación alguna, lo anterior de conformidad con la siguiente imagen:



**SEXTO. Del cierre de instrucción.**

Así, una vez transcurrido el término legal, permitió decretarse el cierre de instrucción en fecha veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, en términos del artículo 185, Fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**SÉPTIMO. De la ampliación del término para resolver.**

En fecha trece de junio de dos mil veinticuatro, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios por un plazo de quince días hábiles.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

***“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”*** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

***“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”***, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el ahora Recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. De los alcances del Recurso de Revisión.**

Anterior a todo debe destacarse que el recurso de revisión tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente y será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. Del estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento.**

Es menester resaltar que en el procedimiento de acceso a la información pública y de los medios de impugnación de la materia, se advierten diversos supuestos de procedibilidad que deben estudiarse con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad inmersos en el artículo 9, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en correlación con la seguridad jurídica que debe generar lo actuado ante este Organismo garante.

Siendo una facultad legal entrar al estudio de las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio por este Resolutor; presupuestos procesales de inicio o trámite de un proceso que dotan de seguridad jurídica las resoluciones emitidas por este organismo colegiado, máxime que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia, la cual permite dilucidar alguna causal que impida el estudio y resolución de un asunto en su fondo, cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseerlo.

Estudio de causales de improcedencia que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1).

En primer término es necesario hacer alusión a las solicitudes de información ya que de ellas deriva por un lado al procedimiento de acceso a la información ante el sujeto obligado, y por otro lado la materia sobre la que versara el recurso de revisión ante este Órgano Garante; se resalta la innegable necesidad de interpretar el texto de las solicitudes, porque no se podría entender el derecho de acceso a la información sin la existencia de solicitudes de información a la luz de su interpretación ya que ésta es la fuente de la materia objeto de la transparencia específica en cada recurso de revisión; es decir, no podemos establecer una materia o un tema como objeto de derecho de acceso a la información, si de la solicitud no se entiende o no se precisan temas o materias objetivas; por ello es de notoria importancia el trabajo de interpretación que se le dé a las solicitudes de información, ya que el sujeto obligado puede considerar una circunstancia en particular diversa a la que el particular objetivamente requiere.

Ya que el planteamiento del problema es de toral importancia, a efecto de determinar la intención o voluntad del recurrente a la luz de la interpretación de las solicitudes de información, y que puede generar de forma objetiva y material el sujeto obligado que se relacione con esa intención, respecto del presente asunto se realiza a continuación.

La Ley de Transparencia de la entidad, en su artículo 192, contempla la figura jurídica del sobreseimiento, y específicamente en sus hipótesis inmersas en la fracción III, refieren que se sobreseerá el asunto cuando el sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia.

Bajo esa línea, con la finalidad de determinar si se modificó o revocó el acto u omisión del **Sujeto Obligado**, para el efecto de que quede sin materia el recurso de revisión, es necesario realizar una valoración de la información remitida en informe justificado y determinar si dicha consecuencia se subsume en el presupuesto procesal que establece la fracción III, del artículo 192, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a efecto de generar certeza jurídica sobre la satisfacción del derecho de acceso a la información accionado por el particular, sirviendo para tales efectos las siguientes líneas argumentativas.

En este sentido nuestro estudio versará en determinar si la información remitida mediante respuesta, colma el derecho de acceso a la información solicitado por laparte **Recurrente**, para ello analizaremos lo solicitado y la información proporcionada.

**REQUERIMIENTOS SOLICITADOS:**

1. El número de cuerpos, cadáveres y/ u osamentas que al día del 2 de abril de 2024 se encuentren en calidad de no identificados o desconocidos y que hayan sido ingresados a la institución forense y/o servicios médicos forenses de toda la entidad federativa del 1 de enero de 2010 al 1 de enero de 2018.
2. Solicito que para cada cuerpo, cadáver y/u osamenta se entregue la siguiente información que es pública y existente de acuerdo evidencia presentada más adelante:
   1. Año en que fue ingresado cada cuerpo, cadáver y/u osamenta a los servicios médicos forenses de la entidad federativa.
   2. Sexo de cada cuerpo, cadáver y/u osamenta a los servicios médicos forenses de la entidad federativa.
   3. Lugar actual de resguardo de cada cuerpo, cadáver y/u osamenta a los servicios médicos forenses de la entidad federativa. Es decir, si fueron enviados a centros educativos y/o universidades, si están resguardado en algún servicio médico forense, si fueron inhumados en alguna fosa común, si fueron resguardados en algún centro de resguardo, panteón ministerial o panteón forense o algún otro lugar de resguardo.

Atento a la solicitud de información el **Sujeto Obligado**, mediante el oficio número **01385/MAIP/FGJ/2024**, emitió su respuesta en donde se advierte lo siguiente:

* La Coordinación General de Servicios Periciales, agregó una tabla con la información que cuenta el Servicio Médico Forense Estatal, cabe aclarar que, **derivado de la creación del Banco de Datos Forenses, es a partir del año 2018, que se cuenta con información procesada, cotejada y validada de ese año a la fecha**.
* Por lo que, respecta al complemento de la información que solicita, es de señalar que esta Coordinación General de Servicios Periciales no cuenta con la información desagregada como como lo solicita, por lo que, no es posible emitirla de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.



Es así que derivado de la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado**, la parte **Recurrente**, interpuso el presente recurso de revisión, señalando sustancialmente como sus razones o motivos de inconformidad, lo siguiente: ***“El Sujeto Obligado no entregó la información completa en tanto no entregó información respecto al periodo 2010-2017 pese a que en una solicitud anterior sí los ha entregado, constituyendo una hecho notorio su existencia. Los detalles se encuentran en el documento adjunto de trámite (edomex1) y la respuesta anterior a la solicitud con folio 01142/FGJ/IP/2019 en la que se constata que la información es existente y constituye un hecho notorio que debe ser pública y, en consecuencia, entregada.”*** (Sic).

Visto lo anterior, se colige que el **Recurrente** está parcialmente conforme con la respuesta emitida por **El Sujeto Obligado**, ya que expresamente manifestó en dichos motivos que se encuentra inconforme por la **falta de la información del periodo comprendido del año 2010 al 2017**; y toda vez que **no impugnó lo relativo a los demás puntos**, dichas cuestiones se considera que la parte **Recurrente** consintió parte de la respuesta otorgada.

Lo anterior es así, debido a que cuando el solicitante no expresa razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros de la respuesta que pudieran ser un agravio a su derecho, los mismos deben estimarse atendidos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

“***REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES****. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

Así, la parte de la solicitud sobre la que no se expresó inconformidad, debe declararse consentida por el hoy **Recurrente**, ya que no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar la parte de la respuesta con relación a la parte de la solicitud que no fue motivo de disenso ya que se infiere un consentimiento de la recurrente ante la falta de impugnación eficaz. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

*“****ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO****. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

Por lo que, el **Sujeto Obligado**, en la etapa de manifestaciones, el **Sujeto Obligado** refutó los puntos recurridos por parte del particular, y amplió su respuesta respecto de la temporalidad requerida, de conformidad con lo siguiente:

* Mediante oficio número **1723/MAIP/FGJ/2024**, la Titular de la Unidad de Transparencia, informó que, la Coordinación General de Servicios Periciales, realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, encontrando un oficio del 13 de enero de 2020, en el cual el entonces Subdirector de Servicios Periciales, en esa fecha informó que ***“de 2010 con corte al 31 de diciembre del año 2019, cuenta con 5,383 cuerpos en fosa común sin identificar y 103 en gavetas”***; por lo que, al obrar los datos en documento oficial y los mismos fueron entregados para dar respuesta a una solicitud de información, manifiesta que se puede establecer dicha información como adicional a la ya proporcionada.
* **Respecto al periodo que comprende de 2010 a 2017, es el único dato que obra en los archivos de la Coordinación, es decir, no se cuenta con una base de datos o documento que permita obtener el desglose de información que requiere el particular, toda vez que, se reitera, la base de datos que permite proporcionar la información solicitada data de 2018, por lo que, no se tiene un desglose o documento anterior a ese año**, por lo antes expuesto, se insiste que, la Coordinación General de Servicios Periciales, no cuenta con la información desagregada por lo que, no es posible emitirla.

Ante ello, es de señalar que el artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dispone:

*“****Artículo 4.*** *…*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.”*

Del precepto legal invocado, se desprende, que la información generada, obtenida, adquirida, transmitida, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información.

Por su parte, el artículo 12, de la Ley de la materia establece que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información que generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven, y sólo facilitarán las que se les requiera y obre en sus archivos, en el estado en el que se encuentre, sin la obligación de generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones; tal y como se señala a continuación:

*“****Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

En síntesis, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública, asimismo, el artículo 24, de la Ley de la materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el derecho de acceso a la información pública.

En esta misma tesitura, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un soporte documental en cualquiera de sus formas, a saber: **expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias** de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de conformidad con el artículo 3, fracción XI, de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro* ***registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados****, sus servidores públicos e integrantes,* ***sin importar su fuente o fecha de elaboración.*** *Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

*(…)”*

Además, es importante señalar que el artículo 18, de la Ley en la materia, los Sujetos Obligados cuenta con la obligación de documentar todos los actos que derive de sus atribuciones, funciones y competencia desde su origen la eventual y reutilización de la información que generen, por lo tanto toda la información que sea generada, posea y administre, es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la misma, por lo tanto esta debe ser proporcionada siempre y cuando se halle en los archivos documentales de los Sujeto Obligados y en las condiciones que se encuentre, la cual no podrá sufrir modificaciones o procesamiento, no presentarla conforme a los interés de los particulares, como de igual forma los Sujeto Obligados no deberán de generar, resumir o efectuar cálculos o practicar investigaciones.

De la misma forma, de acuerdo al contenido del artículo 160, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dispone:

***Artículo 160****. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.*

Sirve como apoyo a lo anterior, el criterio 09-10, emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que a la letra dice:

***“Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información.****Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.” (Sic)*

Además, a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé en su artículo 23, fracción I, que son Sujetos Obligados a Transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos que obren en su poder:

***Artículo 23.*** *Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:*

***I.*** *El Poder Ejecutivo del Estado de México, las dependencias, organismos auxiliares, órganos, entidades, fideicomisos y fondos públicos, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México;*

Expuesto lo anterior, se procede al análisis de la totalidad de las constancias que integran el expediente electrónico del **SAIMEX**, a efecto de determinar si con la información remitida por **El Sujeto Obligado** a través de su respuesta e informe justificado, colma con lo requerido en dicha solicitud.

Por lo que, referente al punto recurrido por parte del particular, correspondiente a:

* “El Sujeto Obligado no entregó la información completa en tanto no entregó información respecto al periodo 2010-2017 pese a que en una solicitud anterior sí los ha entregado, constituyendo un hecho notorio su existencia. Los detalles se encuentran en el documento adjunto de trámite (edomex1) y la respuesta anterior a la solicitud con folio 01142/FGJ/IP/2019 en la que se constata que la información es existente y constituye un hecho notorio que debe ser pública y, en consecuencia, entregada.” (Sic).

Así, se tiene que el **Sujeto Obligado**, por medio de la Coordinación General de Servicios Periciales, comunicó en Informe Justificado que, realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, encontrando un oficio del 13 de enero de 2020, en el cual el entonces Subdirector de Servicios Periciales, en esa fecha informó que ***“de 2010 con corte al 31 de diciembre del año 2019, cuenta con 5,383 cuerpos en fosa común sin identificar y 103 en gavetas”***; por lo que, al obrar los datos en documento oficial y los mismos fueron entregados para dar respuesta a una solicitud de información, manifiesta que se puede establecer dicha información como adicional a la ya proporcionada.

**Respecto al periodo que comprende de 2010 a 2017, es el único dato que obra en los archivos de la Coordinación, es decir, no se cuenta con una base de datos o documento que permita obtener el desglose de información que requiere el particular, toda vez que, se reitera, la base de datos que permite proporcionar la información solicitada data de 2018, por lo que, no se tiene un desglose o documento anterior a ese año**, por lo antes expuesto, se insiste que, la Coordinación General de Servicios Periciales, no cuenta con la información desagregada por lo que, no es posible emitirla.

Ahora bien, es importante resaltar que, de conformidad con el Acuerdo número 01/2016 del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por el que se precisan las denominaciones y atribuciones de algunas unidades administrativas y se adscribe al personal de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se determinó que, en tanto se expida y entre en vigor el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se aplicará el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, salvo en las disposiciones que se contrapongan con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Acuerdo.

Por ello, el en Acuerdo en comento se estableció que para armonizar las funciones de las Unidades administrativas previstas en el Reglamento de la Procuraduría, con las de nueva creación en la Ley de la Fiscalía, se actualizaron las denominaciones de las siguientes Unidades:

1. Subprocuraduría General: Vicefiscalía General;
2. Subprocuraduría de Atención Especializada: Fiscalía Central de Atención Especializada;
3. Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género: Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género;
4. Subprocuraduría Jurídica: Fiscalía Central Jurídica;
5. Coordinación de Planeación y Administración: Oficialía Mayor;
6. Comisaría General de la Policía Ministerial: Coordinación General de la Policía de Investigación;
7. **Instituto de Servicios Periciales: Coordinación General de Servicios Periciales;**
8. Coordinación de Combate al Secuestro: Coordinación General de Combate al Secuestro;
9. Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador: Coordinación General de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Fiscal;
10. Coordinación de Investigación y Análisis: Coordinación General de Investigación y Análisis;
11. Coordinación de Vinculación: Coordinación General de Vinculación. Las Fiscalías Regionales y Especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como **las Unidades Administrativas no mencionadas, mantendrán su denominación y adscripción actual**.

En ese sentido, tomando en cuenta la información proporcionada por el **Sujeto Obligado**, se desprende que toda la información generada, poseída o administrada por los sujetos obligados es pública, y que los sujetos obligados sólo están constreñidos a proporcionar la información que se les requiera **y que obre en sus archivos y en el estado en el que esta se encuentre**, sin estar obligados a presentarla conforme al interés del solicitante ni a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.

Por lo que, implica que para satisfacer el derecho de acceso a la información **los sujetos obligados deberán entregar la información que hayan generado con anterioridad a las solicitudes de información** y que conste en algún documento, en el estado en el que ésta se encuentre en sus archivos.

Lo anterior se robustece con la definición de derecho a la información del doctor Ernesto Villanueva Villanueva quien la define como *«… la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática…»[[2]](#footnote-2) (Sic)*

Ahora bien, para entender los alcances de la información pública se considera importante citar el criterio de interpretación 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México «Gaceta del Gobierno» el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone lo siguiente:

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 32, 4,11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

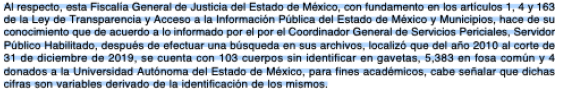
*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.*

Por tanto, el derecho a la información constituye **una prerrogativa a acceder a documentación que obra en los archivos de los sujetos obligados**, quienes están constreñidos a proporcionarla en el estado en el que se encuentre, y este **se colma cuando se hace entrega de un documento en el que obre la información solicitada**.

Por ello, queda claro que el Particular, no requiere obtener documentos ya existentes, sino que su deseo, es la generación de un documento *ad hoc*, es decir, desea que la información respecto al periodo 2010-2017, se desagregue tal y como lo solicita; asimismo, es importante señalar que, el mismo **Recurrente** remitió diversos documentos en donde indicaba que había realizado diversas solicitudes de información y que el **Sujeto Obligado** sí entrega lo requerido; no obstante, de las documentales referidas, se observa que dicha información es la misma que remitió en informe justificado, de conformidad con la siguiente captura de pantalla:



En consecuencia, se tiene que la información complementaria rendida por el **Sujeto Obligado** es suficiente para colmar las pretensiones del hoy **Recurrente** y, por ende, se subsanó la inconformidad expresada por el particular y se tiene por satisfecho su derecho de acceso a la información pública.

Así que, este Órgano Garante considera que de la respuesta primigenia y de los razonamientos hechos mediante el informe justificado proporcionado por el **Sujeto Obligado**, cumplen con lo establecido con el principio de la máxima publicidad de la información, ya que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones de la materia.

Hasta lo aquí expuesto, se concluye que **El Sujeto Obligado** satisfizo el derecho de acceso a la información mediante la respuesta primigenia y la modificación de la misma en su informe justificado, actualizándose la fracción III, del arábigo 192, de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, por darse por satisfechos los elementos que integran dicha hipótesis, a saber:

1. El primero de ellos es que el **Sujeto Obligado** responsable del acto lo modifique o revoque, lo que se demuestra con las documentales en el informe justificado de fecha **trece de mayo de dos mil veinticuatro**, el cual deviene de la autoridad quien emitió el acto impugnado.
2. Por lo que hace al segundo elemento inmerso en el numeral en comento, se requiere que el recurso de revisión se quede sin materia, lo cual se actualiza con las líneas argumentativas inmersas en el presente considerando, atendiendo a que la materia del recurso de revisión se hizo consistir en **modificar su respuesta primigenia**, proporcionando nuevos elementos en el informe justificado; lo que se vio superado con las referencias electrónicas señaladas en el inciso anterior.

En conclusión, la ley de la materia establece en la fracción III, del artículo 192, de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, que a la letra establecen:

***“Artículo 192.*** *El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:*

1. *El recurrente se desista expresamente del recurso;*
2. *El recurrente fallezca o, tratándose de personas jurídicas colectivas, se disuelva;*
3. ***El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia****;*
4. *Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley; y*
5. *Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso.”*

Por lo que hace a los requisitos de procedencia del sobreseimiento en términos del artículo 192, de la Ley de Transparencia estatal se establece lo siguiente:

1. Mediante acuerdo de fecha **treinta de abril de dos mil veinticuatro**, el Comisionado **José Martínez Vilchis**, admitió a trámite el recurso de revisión que nos ocupa.
2. Lo esgrimido por el particular dentro del recurso de revisión impugnado queda sin materia, toda vez que **El Sujeto Obligado** colmó el derecho de acceso a la información del **Recurrente**,ello al modificar su respuesta primigenia, mediante la información remitida en su informe justificado, en fecha **trece de mayo de dos mil veinticuatro**.
3. El recurso **02195/INFOEM/IP/RR/2024**, no actualiza ninguna hipótesis de las inmersas en el numeral 179, de la Ley en materia vigente en la entidad.

Es importante resaltar a manera de analogía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el número 2 de la Serie *Estudios Introductorios sobre el Juicio de Amparo* relativo a *LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO* definió a la improcedencia del amparo como la institución jurídica procesal en la que, al actualizarse ciertas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se ve impedido para analizar y resolver el fondo del asunto y que la causa de improcedencia puede tenerse por acreditada desde el momento en que se presenta la demanda de amparo, **lo que generará que la demanda sea desechada; o bien, después de admitida la demanda, lo que tendrá como consecuencia que se sobresea en el juicio.**

Por tanto, al acreditarse la procedencia del sobreseimiento, este Instituto está imposibilitado para analizar las cuestiones de fondo, en virtud de que el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina el proceso por cuestiones ajenas al fondo del asunto, lo anterior conforme a la jurisprudencia identificada como el registro digital 220705 2, en la que se estipula lo siguiente:

***SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.***

*La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.*

En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan parcialmente procedentes los motivos de inconformidad que arguye **El Recurrente** en su medio de impugnación que fue materia de estudio, por ello con fundamento en el artículo 186, fracción I, en concordancia con el artículo 192, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **SOBRESEE** el recurso de revisión **02195/INFOEM/IP/RR/2024**,que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y,

**SE RESUELVE**

**PRIMERO**. Se **SOBRESEE** el recurso de revisión número **02195/INFOEM/IP/RR/2024**, porque al modificar la respuesta, el recurso quedó sin materia, el cual, se actualiza la causal establecida en el artículo 192 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y en términos del Considerando **TERCERO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** **NOTIFÍQUESE** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado**.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** al **Recurrente** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** y **correo electrónico**, y hágase de su conocimiento que en caso de que considere que le cause algún perjuicio la presente resolución, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 196, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA (AUSENCIA JUSTIFICADA); EN LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/jasm

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1))*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. VILLANUEVA VILLANUEVA Ernesto. Derecho de la Información, Ed. Porrúa. S.A., México. 2006. p. 270 [↑](#footnote-ref-2)